



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA CIVIL

Medellín, seis (6) de marzo de dos mil veintitrés (2.023)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
QUEJA: 05001 31 03 001 2023 00060 01

Demandante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM)  
Demandada: INGENIERÍA COLOMBIANA DE TRAZADOS Y ESTUDIOS S.A.S.  
(INCOLTES).  
Extracto: Decreta medida para sanear el trámite.

ASUNTO A TRATAR

Sería del caso resolver la queja puesta en consideración; sin embargo, se estudia el proferir una medida de saneamiento procesal, previos:

ANTECEDENTES

**De la acción:**

EPM ejerciendo la acción popular<sup>1</sup>, pretende se DECLARE que INCOLTES S.A.S. vulneró el “*derecho colectivo a la defensa del patrimonio público*” (sic), debiéndose ordenar a esta última devolver los dineros públicos consignados erróneamente en su cuenta corriente, así como condenarla en costas.

---

<sup>1</sup> Artículo 88 Constitución Nacional, regulada en la Ley 472 de 1.998.

La *causa petendi* se fundó en que el día 21 de diciembre de 2.015, EPM e INCOLTES S.A.S. celebraron el contrato CT 2015-002567, cuyo objeto era construir el relleno sanitario del municipio de Toledo (Antioquia), lo cual está enmarcado en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Como anticipo EPM entregó al contratista la suma de \$549'604.086.15; sin embargo, el 6 de enero de 2.017, aquel declaró el incumplimiento la accionada, por lo que hizo uso de la póliza dispuesta para el contrato, cobrando los perjuicios que ascendían a \$466'729.670.00, de lo que se descontó \$89,641,757.00, monto que se le tenía retenido al contratista. El contrato terminó, haciendo el cierre de cuenta el 19 de abril del 2.017.

En el año 2.020, EPM advirtió que los recursos ingresados en virtud de la reclamación a la aseguradora no habían sido distribuidos, estando pendientes de cancelar contable y contractualmente, por lo que se iniciaron los procedimientos administrativos internos.

El 28 de julio de 2.021, por confusión EPM desembolsó la suma retenida al contratista, consignándole \$89'641.757.00 en su cuenta corriente 236027868 del Banco de Bogotá, la cual está embargada por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado; monto este del que la actora realizó solicitudes de reintegro tanto a INCOLTES S.A.S. como al Banco de Bogotá, pero sin encontrar solución alguna<sup>2</sup>.

### **De lo actuado en la jurisdicción:**

---

<sup>2</sup> Archivo 02 Cuaderno Administrativo – Expediente Digital (en adelante E.D.).

La demanda inicialmente correspondió al JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de Medellín, el que en auto del 11 de enero de 2.023 se declaró incompetente, remitiendo el asunto a los Juzgados Civiles del Circuito de igual ciudad<sup>3</sup>.

Recibido el asunto por el *a quo*, en auto calendado el 9 de febrero de 2.023 expuso que la presente no es una acción popular, sino un proceso de índole civil por el pago de lo no debido, decidiendo:

1. Rechazar de plano, por improcedente, la acción popular.
2. En virtud de la cuantía, remitir el asunto por competencia a los Juzgados Civiles Municipales de Medellín<sup>4</sup>.

Tal decisión fue notificada vía correo electrónico el 10 de febrero hogaño, día en que también se envió la actuación a la oficina judicial, donde en nuevo reparto quedó radicado en el JUZGADO VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL de Oralidad de Medellín, el que el día 15 anterior, decidió devolver el expediente al JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO, con el fin que se agote el término de ejecutoria de la providencia que rechazó la demanda, pues dicho auto fue publicado en estados el día 13 de febrero de 2.023<sup>5</sup>.

El 15 de febrero pasado, EPM radicó recurso de apelación contra el auto que rechazó su acción<sup>6</sup>; pero en correo electrónico de ese mismo día suscrito por el “*Secretario Ad hoc*” del juzgado *a quo*, se indicó al

---

<sup>3</sup> Dicha autoridad judicial consideró que a la luz del artículo 3° de la Ley 80 de 1.993, los particulares que celebran contratos con las entidades públicas tienen como propósito colaborar en la consecución de los fines estatales, pero no por ello se traslada a los mismos la función administrativa; en ese sentido, al demandado no se le puede atribuir el desempeño de funciones administrativas, de ahí que el asunto es competencia de la especialidad civil. Ver archivo 07 Cuaderno Administrativo – E.D.

<sup>4</sup> Archivo 03 Cuaderno Civil – E.D..

<sup>5</sup> Archivos 04, 05, 09 y 10 Cuaderno Civil – E.D.

<sup>6</sup> Archivos 06 y 07 Cuaderno Civil – E.D.

actor que no se impartiría trámite a la alzada, pues cualquier actuación estaría viciada de nulidad según el inciso 1° del artículo 16 procesal.

Frente a lo anterior, el 16 de febrero hogano, la accionante presentó los recursos de reposición y en subsidio queja, argumentando que el rechazo no ha cobrado ejecutoria, debiéndose brindar trámite a su alzada, la cual procede conforme el artículo 321 del C. G. del P.<sup>7</sup>.

En providencia del 20 de febrero de 2.023 el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO, iteró que carece de competencia según lo dispuesto en el artículo 16 del C. G. del P., visto en armonía con el artículo 133.1 ídem; sin embargo, para “*ahondar en garantías*”, concedió la queja.

### **De la medida de saneamiento procesal:**

En cuanto a lo intitulado, el Juzgador tiene el deber de adoptar las necesarias para sanear o precaver vicios de procedimiento, tal como se desprende de los numerales 1° y 5° del artículo 42 del C. G. del P., visto en armonía con el artículo 132 ídem.

En este asunto está claro que el *a quo*, en auto del 9 de febrero de 2.023 decidió rechazar de plano la acción popular calificándola de “*improcedente*”, y en virtud de la cuantía, remitir el asunto por competencia a los Juzgados Civiles Municipales de Medellín.

De entrada debe decirse que si bien es cierto que conforme al artículo 139 del C. G. del P., la declaratoria de incompetencia es una decisión

---

<sup>7</sup> Archivo 11 Cuaderno Civil – E.D.

que no admite recurso, en lo que tiene razón al Juzgado de primera instancia, también lo es que el auto que rechaza la demanda admite impugnaciones; no obstante, el día 10 de febrero anterior, sin alcanzarse ejecutoria (artículo 302 ídem), el expediente se envió para reparto a los Juzgados Civiles Municipales.

Tan expedita actuación configuró la causal de nulidad dispuesta en el numeral 6° del artículo 133 procesal civil, omitiéndose la posibilidad de agotar los recursos procedentes, con lo que indefectiblemente se conculcan los derechos de contradicción y defensa, ambos inherentes al debido proceso, incluso, la misma confianza legítima<sup>8</sup>.

Tal situación es suficiente para proferir la medida de saneamiento anunciado, pero a ello se agregan las siguientes irregularidades procesales:

1. El 13 de febrero de 2.023, el *a quo* notificó por estados electrónicos la providencia de rechazo atrás aludida, cuando para esa fecha ya había enviado el proceso a los Juzgados Municipales. Es decir, antes de la ejecutoria de la providencia, estaba materializando la misma, por lo que con tan precoz medida, infracciona el artículo 302 procesal civil.
2. Los recursos de reposición y en subsidio queja, se generaron frente a una decisión del “*Secretario Ad hoc*”. Se explica, EPM apeló el auto que rechazó la acción, a lo que en correo electrónico de ese mismo día, el aludido empleado carente de jurisdicción (artículo 13 Ley 270 de 1996), negó el trámite aduciendo que

---

<sup>8</sup> Tal principio funciona como un límite a las actividades de las autoridades, haciéndole frente a modificaciones intempestivas en la manera de proceder. Dicho en otras palabras, este principio es la confianza que tienen los ciudadanos frente a la estabilidad que se espera de los Entes Estatales, por lo que debe ser respetada y protegida. Corte Constitucional sentencia T 453 de 2.018

*“cualquier actuación estaría viciada de nulidad”. Tamaño despropósito es un vicio absoluto que infracciona el artículo 116 de la Carta Política, pues no puede olvidarse que del artículo 6º de la misma Constitución; “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.” (subrayado intencional).*

3. El *a quo* previo a conceder la queja, no resolvió la reposición. Recuérdese que el primero es subsidiario del segundo, por lo que procesalmente no sería dable resolver sobre la queja cuando no existe decisión sobre el recurso horizontal, tal como lo dispone el artículo 353 del C. G. del P..

Todo lo expuesto lleva a declarar la nulidad de lo actuado desde el 9 de febrero de 2.023, lo que incluye la remisión del proceso a los Juzgados Civiles Municipales de Medellín.

Finalmente, téngase presente que el trámite que nos ocupa tiene connotación preferencial, tal como lo dispone el artículo 6º de la ley 472 de 1998, por lo que el juez que conozca el asunto, ha de proceder de conformidad.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín:

## RESUELVE

ÚNICO: Declarar la nulidad de las diligencias de la referencia, desde e inclusive el auto calendado el nueve (9) de febrero de dos

mil veintitrés (2.023), para que se proceda conforme a derecho en los términos indicados en la parte motiva de la presente providencia.

Notifíquese:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Omar Bohórquez Vidueñas', written in a cursive style.

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS  
MAGISTRADO